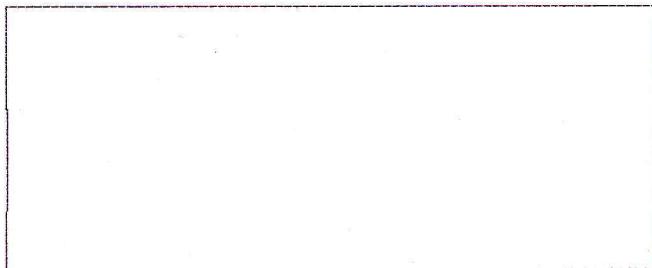


LA POLÍTICA EN TIEMPOS DE LOS KIRCHNER

ANDRÉS MALAMUD Y MIGUEL DE LUCA

(COORDINADORES)





Eudeba
Universidad de Buenos Aires

1^a edición:

© 2011
Editorial Universitaria de Buenos Aires
Sociedad de Economía Mixta
Av. Rivadavia 1571/73 (1033) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 4383-8025 / Fax: 4383-2202
www.eudeba.com.ar

Imagen de tapa: *Pangolín* de Pablo Besse.
Diseño de tapa: Troopers
Corrección general: Eudeba

Impreso en la Argentina
Hecho el depósito que establece la ley 11.723



No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopias u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

ENTRE LA PLAZA Y LA CASA ROSADA: DIÁLOGO Y CONFRONTACIÓN ENTRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL GOBIERNO NACIONAL

Sebastián Mauro y Federico M. Rossi

En este capítulo se hará un balance de los principales movimientos sociales y protestas que se expresaron con particular relevancia entre 2003 y 2011, así como las estrategias de incorporación, desmovilización, cooptación y confrontación que el gobierno nacional utilizó para tratar estos desafíos. Se presentará una descripción breve de la interacción entre diferentes movimientos sociales y los gobiernos kirchneristas, en busca de ofrecer claves que permitan interpretar las particularidades de cada proceso, así como las características salientes que definieron en este sentido al kirchnerismo.

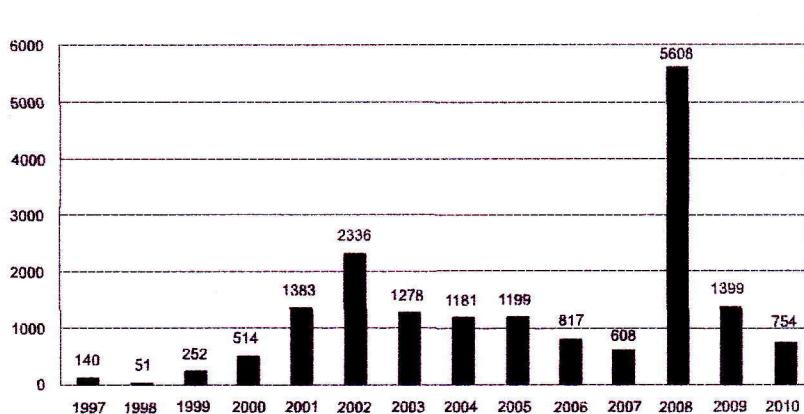
Desde su asunción, Néstor Kirchner enfrentó un panorama de mucha movilización y poca legitimidad electoral: mientras que en mayo de 2003 las tasas de desocupación y subocupación ascendían al 34,4% (afectando a más de cinco de millones de personas), Kirchner fue electo presidente con el 22,2% de los votos (poco más de cuatro millones de sufragios). Durante 2002-2003, el movimiento de las asambleas, los ahorristas y los piqueteros impulsaban una importante cantidad de protestas semanales. En su apogeo, las asambleas habían llegado a alrededor de 113 sólo en la ciudad de Buenos Aires: organizaron comedores, apoyaron ocupaciones de fábricas¹ y las luchas de los piqueteros. A

1. Las fábricas ocupadas pasaron de 19 en 2001 a 82 en 2003, según Trinchero (2005) // *De

su vez, mantuvieron una posición de rechazo a las elecciones presidenciales de 2003 en nombre de la renovación total de las élites bajo el lema “¡Qué se vayan todos!”. Mientras, junto a la Asociación de Abogados Laboralistas, seguían organizando cacerolazos contra los jueces de la Corte Suprema, que eran considerados corruptos (Rossi, 2005).

En simultáneo, los niveles de movilización del movimiento piquetero eran muy altos, a pesar de la declinación en el número de piquetes desde 2003 (gráfico 1.1). Mientras algunas organizaciones habían disminuido su participación en acciones de protesta desde la represión del Puente Pueyrredón en junio de 2002, que dejó el saldo de dos muertos, la mayor parte continuaba movilizándose en reclamo de trabajo e inclusión social. En particular, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón seguía reclamando justicia por los acontecimientos del Puente.

Gráfico 1.1
Número total de piquetes/corte de rutas por año, 1997-2010



Fuente: Informe de Josefina Ichaso, Centro de Estudios para la Nueva Mayoría (<<http://nuevamayoria.com>>).

acuerdo a Trinchero (2005), las fábricas ocupadas pasaron de 19 en 2001 a 82 en 2003//.

En 2003 el movimiento de las asambleas vecinales y populares se encontraba en declive. “Piquete y cacerola, ¡la lucha es una sola!”, la consigna que había movilizado durante la presidencia de Eduardo Duhalde, parecía ser algo del pasado. Si bien la desmovilización de las asambleas se inició antes de la llegada de Kirchner a la Casa Rosada, se acentuó cuando las elecciones mostraron una participación masiva, aunque sin claros vencedores. Desde ese momento sus principales reclamos se dirigirán con mayor acento al nivel local. Sin embargo, muchas de sus demandas serán respondidas por el flamante presidente. Desde el comienzo, en la búsqueda por obtener legitimidad, el gobierno impulsó con éxito la remoción de los jueces de la Corte Suprema y su reemplazo por un cuerpo con mayor autonomía y pluralidad ideológica (véase el capítulo de Gargarella). En cambio, no promovió con la misma fuerza reemplazos entre los funcionarios públicos del poder ejecutivo ni alentó un recambio significativo en la composición parlamentaria, haciendo de la renovación de las élites un proceso parcial. La preocupación central del gobierno fue disminuir sin represión física al movimiento piquetero y dar un marco legal a las fábricas ocupadas.² Para ello utilizó la distribución de planes sociales, la judicialización de la protesta y la incorporación selectiva.

1. La incorporación selectiva del movimiento piquetero

El gobierno buscó incorporar, cooptar y/o desmovilizar a las principales organizaciones piqueteras. Entre sus primeras medidas, invitó a participar en la coalición a algunas de las organizaciones, como la Federación de Trabajadores por la Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), Barrios de Pie y el recién creado Movimiento Evita. En 2004, la Organización Barrial (OB) Túpac Amaru (Jujuy) y parte del Movimiento Territorial Liberación (MTL) del Partido Comunista Argentino decidieron apoyar al gobierno. Las organizaciones piqueteras que tomaron esta determinación lo hicieron en base a diversas concepciones de su rol en la gestión. A pesar de que los piqueteros ocuparon cargos ejecutivos a nivel nacional, provincial y municipal, siempre preservaron un rol secundario en el proceso de toma de decisiones. Una excepción parcial fue el caso de Emilio Pérsico, principal

2. La Ley de Concursos y Quiebras fue reformada en dos oportunidades (2002 y 2011). En los distritos más afectados por la problemática (la ciudad y la provincia de Buenos Aires), gobiernos aliados al kirchnerismo implementaron políticas favorables a la recuperación de las empresas en quiebra. La Legislatura porteña, por ejemplo, sancionó expropiaciones en 2004, como la de Artes Gráficas Chilavert.

dirigente del Movimiento Evita, quien se desempeñó como Vicejefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Felipe Solá.

Mientras casi la mitad del movimiento se incorporó o apoyó al gobierno, el resto no aceptó la invitación y continuó con la estrategia disruptiva de los años previos. Como un todo, el movimiento piquetero sufrió una paulatina desmovilización (gráfico 1.1). Si incluso se analiza la información del año 2006, la distribución geográfica de las protestas revela la naturaleza Buenos Aires-céntrica de la política contenciosa. El 30% de los piquetes fueron realizados en la provincia y el 19% en la ciudad de Buenos Aires, seguidos por Jujuy (10%), Salta y Santa Fe (5% cada una) y Tucumán y Córdoba (4% cada una). Incluso, esta información y la obtenida por otros investigadores (Schuster *et al.*, 2006) **revela** **/*revelan*/** la evidente inclusión del corte de ruta en el repertorio de protestas argentino, así como una desmovilización del movimiento piquetero, ya que tan sólo llevó adelante en 2006 el 9,1% de los piquetes. En este marco, aquellas organizaciones que no aceptaron integrar el gobierno se unieron con el fin de confrontarlo. Una serie de eventos de protesta en 2004 y 2005 representaron importantes derrotas para las organizaciones piqueteras en la oposición, las que recién en 2008 lograrían nuevas movilizaciones masivas.

La incorporación parcial del movimiento piquetero en la coalición de gobierno siguió un proceso de creciente formalización, de la mano del deseo de Kirchner por reconstruir una base territorial que le permitiera depender menos de las estructuras tradicionales del Partido Justicialista (PJ). Mientras la Secretaría de Trabajo siguió siendo la principal responsable en la distribución de los planes sociales, la Secretaría General de la Presidencia se constituyó en el más importante espacio gubernamental abierto a los piqueteros. Esta agencia, que por lo general se ocupaba de negociaciones informales, fue parcialmente redefinida para la incorporación piquetera. Sin embargo, la Secretaría General no coordinaría políticas públicas para los desocupados. Hasta 2008, cuando se disolvió el espacio otorgado para las organizaciones piqueteras en la Secretaría General, el principal objetivo de los piqueteros en este ámbito fue el de reconstruir el vínculo entre las élites políticas partidarias y los sectores populares organizados. Este proceso implicó una gran cantidad de políticas sociales, pero también clientelismo y la judicialización de la protesta (Svampa y Pandolfi, 2004).

Junto con el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, en 2007 accedieron al Congreso nacional representantes de Barrios de Pie (Cecilia Merchán y Victoria Donda), del Movimiento Evita (Gloria Bidegain y Adela Segarra) y, por la oposición, del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de La Juanita (Héctor "Toty" Flores). A nivel provincial, en varios distritos otras organizaciones lograrían escaños, como la FTV en la provincia de Buenos Aires y el Polo Obrero del Partido Obrero en Salta. La representación legislativa de

algunos de los principales actores en la resistencia a las reformas neoliberales no modificó las relaciones de poder en las instituciones parlamentarias, pero implicó una primera incorporación de sectores excluidos del campo político.

2. La división en el movimiento por los derechos humanos

Como sucedió en el caso del movimiento piquetero, el movimiento por los derechos humanos también vivió reacomodamientos en su posicionamiento respecto del gobierno de Kirchner. Por un lado, la presidencia impulsó políticas sobre justicia y esclarecimiento de los acontecimientos de violaciones a los derechos humanos protagonizados por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura, respondiendo así a gran parte de los reclamos. Por el otro, se preservaron la mayor parte de las lógicas de represión policial selectiva y persecución a disidentes políticos que caracterizaron a todo el periodo post-1983. Esto produjo que mientras una parte se posicionara como aliada del gobierno, otra mantuviera cierta distancia o incluso fuese opositora. En el primer grupo, se ubicaron la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El sector mayoritario de esta organización, liderado por Hebe de Bonafini, mantendrá una posición de apoyo activo y de expansión de su agenda de acciones a la construcción de viviendas y proyectos educativos. Esta postura, sin embargo, no será compartida por toda la Asociación, que preservó un grupo minoritario disidente llamado "Pañuelos en Rebeldía". A su vez, las Abuelas de Plaza de Mayo, parte de H.I.J.O.S. y de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora apoyaron al gobierno. En cambio, el Centro de Estudios Legales y Sociales conservó una posición de autonomía con cierta simpatía hacia el oficialismo. En la oposición, en cambio, se mantuvieron el sector mayoritario de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y parte de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre continuaron apoyando a las organizaciones sociales ante situaciones de represión durante este periodo. A pesar de que el movimiento por los derechos humanos ya presentaba divisiones internas desde las década del 80, el gobierno de Kirchner acentuó muchas de éstas al agregar una nueva línea demarcatoria.

3. Las protestas por seguridad

Las protestas sociales en demanda de mayor seguridad urbana alcanzaron visibilidad pública en la segunda mitad de la década del 90, aunque no constituyeron un actor organizado ni tuvieron protagonismo en los ciclos de movilización

social (Pereyra, 2008). La atención pública sobre el tema decayó durante la crisis de 2001, para reinstalarse como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos desde 2004.³

En abril de ese año, Juan Carlos Blumberg, padre de un joven secuestrado y asesinado en el conurbano bonaerense, convocó a una multitudinaria manifestación frente al Congreso nacional para apoyar propuestas de reformas sobre las políticas de seguridad nacional y provincial. Gracias a una amplia coalición, las protestas lograron instalar la temática en la agenda de gobierno e impulsar reformas legislativas. La amplia promoción mediática de los reclamos por seguridad y el apoyo de organizaciones como la Red Solidaria y la recientemente constituida Madres del Dolor produjeron una protesta con la participación de alrededor de 150.000 personas. A la masividad de la protesta se le sumó la asistencia de la Asociación de Personal Legislativo y de ex funcionarios especialistas en seguridad, que permitieron convertir un petitorio en significativos cambios en la legislación.

Aunque no se dirigieron directamente hacia el gobierno nacional, las manifestaciones, constituyeron la primera gran movilización que instaló un tema en la agenda política del kirchnerismo. El presidente, que había logrado alcanzar altos índices de popularidad, pero arrastraba la debilidad de su accidentada llegada al poder, evitó rivalizar de manera directa con Blumberg, accediendo a buena parte de las reformas exigidas, pero negándose a satisfacer sus demandas sobre recambios ministeriales en los gobiernos nacional y bonaerense.⁴

Progresivamente, el poder de convocatoria de Blumberg entró en declive. En junio de 2005, a la cuarta y última movilización convocada al Palacio de Tribunales, concurrieron sólo 5000 manifestantes, mientras se acumulaban voces críticas sobre el perfil y la validez de sus propuestas.⁵ Para el liderazgo de Blumberg y su organización, la Fundación Axel Blumberg, significó un deterioro irreversible, como lo demostró el fracaso de su candidatura a la gobernación bonaerense en 2007, donde obtuvo el 1,3% de los votos. Sin embargo, impulsó la instalación del tema de la inseguridad, que se consolidó como una demanda

3. Según los sondeos de la Corporación Latinobarómetro, la delincuencia se ubicó entre los tres principales problemas señalados por los argentinos desde 2004, y pasó a ser el principal desde 2006 (<www.latinobarometro.org>, 17/6/2011).

4. A nivel nacional, se reformaron los Códigos Penal y Procesal Penal, sancionándose seis leyes entre abril y agosto (25.882, 25.886, 25.891, 25.892, 25.893 y 25.928). Se endurecieron penas y el régimen de libertad condicional, se amplió la competencia de la justicia federal y se reglamentaron los servicios de comunicaciones móviles.

5. Por ejemplo, el diario *Página/12* cubrió la primera marcha legitimando la palabra de Blumberg sobre la corrupción policial como factor de la inseguridad (*Página/12*, 2/4/2004). En las semanas subsiguientes, el periódico se desplazaría hacia una posición crítica a sus reclamos (*Página/12*, 25/4/2004).

insatisfecha de la ciudadanía a través de periódicas protestas sociales locales que, sin embargo, preservaron bajos niveles de articulación y organicidad.

4. El movimiento ambientalista: de las papeleras a la minería

En abril de 2005, vecinos de Gualeguaychú, autoconvocados desde 2003 en rechazo a la instalación de dos fábricas de pasta celulosa en la vecina ciudad uruguaya de Fray Bentos, organizaron una masiva movilización y constituyeron la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Durante dos años realizaron cortes en la ruta que conduce al Puente fronterizo General San Martín y lograron que una de las empresas decidiera relocatearse.

El caso se sumaba a otras movilizaciones de comunidades afectadas por explotaciones potencialmente peligrosas para el medio ambiente. En marzo de 2003, vecinos movilizados de la ciudad chubutense de Esquel evitaron la instalación de un emprendimiento minero a cielo abierto, forzando la realización de un plebiscito donde el “No” a la minería se impuso con el 81% de los votos. Nuevos conflictos se sucederían en otras ciudades cercanas a explotaciones similares, como en Andalgalá, Catamarca. Como resultado de la creciente serie de protestas ambientales, en 2006 asambleas de nueve provincias se organizaron en la Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación.

En este contexto, el conflicto en Gualeguaychú sobresalió por varias razones. En primer lugar, su radicalidad, masividad y duración: desde la inauguración de la empresa Botnia en Uruguay hasta 2010, los asambleístas mantuvieron completamente cortado el puente que los comunica con la ciudad de Fray Bentos. En segundo lugar, por la superposición de escalas que involucraba el conflicto. Por un lado, los asambleístas afirmaban defender un estilo de vida comunitario, aislando de potenciales aliados como Greenpeace u otras organizaciones ecologistas. Por otro lado, el hecho de que la pastera se ubicara en Uruguay obligó a intentar una salida por vía diplomática. El Estado argentino, como una de las partes asociadas al Tratado del Río Uruguay, presentó una demanda contra el país vecino en la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento del estatuto binacional, lo que produjo tensiones entre las escalas local, nacional e internacional del conflicto (Delamata, 2009).

La estrategia gubernamental era encauzar la demanda por la vía del derecho internacional para comprometer a los autoconvocados a aceptar el veredicto que dictara la Corte. Para asegurar su compromiso, Kirchner convocó a la asesora legal de los ambientalistas de Gualeguaychú, Romina Picolotti, designándola Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Dos años después, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, este intento de incorporación

estatal del conflicto se reveló inconducente: no sólo no moderó las protestas de los asambleístas (que cortaban el puente internacional de manera ininterrumpida desde 2007), sino que incluso la funcionaria debió renunciar, sospechada por la Justicia de malversación de caudales públicos (*La Nación*, 3/12/2008). No obstante, la vía del reclamo a la Corte Internacional sirvió para condicionar la demanda. En abril de 2010, cuando la Corte emitió su fallo, los asambleístas se vieron obligados a levantar el bloqueo tres meses después, pasando a formas de protesta más esporádicas.

Si bien este conflicto se resolvió en forma negativa para el reclamo ambientalista, la cuestión ambiental emergió como otro de los focos de conflictividad social más relevantes, especialmente en relación con la minería, pero también con cuestiones vinculadas al uso y contaminación de los suelos por la agricultura (Svampa, 2008).⁶

5. El *lockout* y las protestas agrarias

A cuatro meses de la asunción presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, un conflicto con las entidades patronales agropecuarias por el régimen de retenciones a las exportaciones a la soja y al girasol se convirtió en el eje de una intensa polarización política.

La medida aglutinó a un heterogéneo conjunto de organizaciones en una coalición contra las retenciones denominada Mesa de Enlace. Los grandes terratenientes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), los medianos productores de la Confederaciones Rurales Argentinas, las cooperativas de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria y la asociación de pequeños productores Federación Agraria Argentina, afiliada a la CTA, convocaron al cese en la comercialización de productos agropecuarios y al corte de rutas, acompañados por grupos locales de productores no afiliados.

6. Los movimientos sociales también influyeron en otros aspectos de la política exterior, como sucedió durante la Cumbre de las Américas de 2005, en Mar del Plata. La agenda de la reunión incluía debatir la formación del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), impulsada por Estados Unidos y a la que se oponían los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela. En ese marco, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el movimiento por los derechos humanos, las organizaciones piqueteras y los partidos de izquierda y kirchneristas impulsaron la Cumbre de los Pueblos. El objetivo era construir, bajo el modelo del Foro Social Mundial (creado en Porto Alegre, Brasil), un espacio de propuestas alternativas a la versión estadounidense de la integración regional, demostrando que el ALCA no tenía apoyo social. El evento movilizó a alrededor de 40.000 personas y resultó un éxito. El ALCA nunca vio la luz (Bidaseca y Rossi, 2008).

En respuesta, el gobierno ratificó la medida, lo que significó un quiebre en su estrategia ante eventos contenciosos. El gobierno de Néstor Kirchner convocó a parte de los movimientos clave durante 2001-2003, y ante las demandas ciudadanas por seguridad y protección ambiental buscó canales de negociación y/o cooptación. En cambio, frente a la demanda de los ruralistas, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner profundizó el conflicto intentando deslegitimar a la coalición que protestaba y definiéndola como “la oligarquía terrateniente”. Como respuesta se produjo un abrupto retorno del corte de ruta como forma de protesta, pero ya no bajo exclusivo uso piquetero (gráfico 1.1).

La estrategia gubernamental de polarización fue eficaz en movilizar a un sector de la sociedad, pero al mismo tiempo aglutinó a otros sectores contra un gobierno percibido como autoritario. Durante los cuatro meses de conflicto se realizaron masivas movilizaciones. Al *lockout* y los cortes de ruta de los productores se sumaron cacerolazos en distintos centros urbanos. La Mesa de Enlace reunió en Rosario el 25 de mayo de 2008 a 250.000 manifestantes con apoyo de partidos de oposición y grupos piqueteros (*La Nación*, 26/5/2008).⁷ Mientras, la presidenta convocó a un acto el 14 de junio, con apoyo de la Confederación General del Trabajo, la CTA, organizaciones piqueteras (la FTV, el Movimiento Evita y en menor medida Barrios de Pie) y de lucha por los derechos humanos (la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo).

Ante el fracaso de las negociaciones, el gobierno envió al Congreso nacional un proyecto de ley con la intención de legitimar los aranceles impositivos. Una vez aprobado en la Cámara de Diputados (aunque con numerosas deserciones del bloque oficialista), la votación en el Senado se convirtió en objeto de manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires. Frente a la sede de la SRA, los ruralistas convocaron a alrededor de 250.000 manifestantes; mientras que el oficialismo reunió frente al Congreso nacional a más de 100.000. Luego de que la votación resultara empatada, el vicepresidente rechazó la iniciativa. Las organizaciones ruralistas intentaron canalizar su triunfo en mayores medidas impositivas a su favor, e incidiendo en la formación de las listas de candidatos de la oposición para las elecciones legislativas de 2009 (véase el capítulo de Tula y De Luca). Sin embargo, a pesar de su predicamento entre los partidos de oposición, los ruralistas no lograrían imponer nuevos cambios impositivos ni se crearían coaliciones legislativas ruralistas de largo plazo.

7. El movimiento piquetero acentuó sus divisiones durante el *lockout*. La Corriente Clasista y Combativa del Partido Comunista Revolucionario, el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive del Movimiento Socialistas de Trabajadores, el MTD de La Juanita y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados de Raúl Castells apoyaron las movilizaciones de la Mesa de Enlace.

Para el gobierno nacional, que meses antes se había impuesto en las elecciones por un amplio margen, cosechando una holgada mayoría parlamentaria, la derrota significó un quiebre. No sólo perdió los ingresos por el aumento de las retenciones, sino que aglutinó a un sector significativo del electorado en su contra y forzó la defeción de parte de su coalición partidaria durante o después del conflicto. En paralelo, ya desde 2007 Néstor Kirchner había decidido modificar la base de apoyo de la coalición de gobierno y sustentarse en el PJ, dando fin a los intentos por construir una coalición multisectorial. Esta decisión derivó en el alejamiento de grupos piqueteros como Barrios de Pie y la OB Túpac Amaru. Otras optaron por adaptarse a este proyecto como el Movimiento Evita, y finalmente la FTV y el MTL fueron poco a poco relegados de los espacios de tomas de decisiones.

6. Conclusión

La evolución de los principales movimientos y protestas sociales durante el kirchnerismo comenzó con la desmovilización de los protagonistas del ciclo de protestas de 2001-2002. Este proceso fue el resultado de dos factores primordiales. Por un lado, del agotamiento de algunos movimientos como las asambleas, luego de un intenso ciclo de protestas. Por otro lado, debido a las estrategias del gobierno, que generalmente combinaron en el nivel nacional la no-represión física de las protestas, la cooptación o incorporación en la coalición de gobierno de algunas organizaciones y la judicialización de la actividad de muchas otras.

Durante el periodo 2003-2007 emergieron nuevos actores contenciosos cuyos reclamos problematizaron cuestiones como la seguridad urbana y la protección ambiental. Estos actores debieron lidiar con su propia heterogeneidad y fragmentación para sostenerse en el tiempo y consolidarse como movimientos, con éxitos variables. Dichas dificultades fueron alimentadas por la estrategia gubernamental de evitar la confrontación directa, apostando a la incorporación o cooptación y al desgaste de los movimientos.

Con la llegada al poder de Cristina Fernández de Kirchner esta dinámica varió. Los elementos novedosos fueron de dos tipos. Primero, se produjo la convergencia de los intereses corporativos involucrados en la protesta agropecuaria de forma más compacta que en los reclamos por seguridad y ambientales. Segundo, el gobierno apostó a la confrontación directa y la polarización política.⁸ El periodo abierto por esta nueva dinámica ha sido de intensa movilización social

8. Se preservó la lógica de no-represión física. La estrategia de confrontación fue de tipo discursiva y con movilizaciones de apoyo al gobierno frente al reclamo de los actores movilizados.

y de rápidos realineamientos políticos, aunque no produjeron la emergencia de movimientos de relevancia. De una parte, los piqueteros y las organizaciones de derechos humanos mantuvieron sus posiciones en el arco oficialismo-oposición, alternando ciclos de mayor protagonismo según la evolución de la disputa política. De la otra, desde el año 2010, el gobierno nacional ha logrado incorporar a nuevos actores como el movimiento de gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales en la defensa del proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, así como intentar movilizar a nuevos sectores, entre los que se destaca la recurrente apelación a *la juventud* como actor social.

Durante los gobiernos kirchneristas, la incorporación estatal de los actores centrales en la movilización social ha sido una novedad a nivel nacional. No se vivió en esta década más protestas que en la de los 90, pero desde el 2003 el ritmo de las movilizaciones estuvo marcado por otras lógicas. En reemplazo de las campañas de resistencia multisectorial a políticas de ajuste estructural del menemismo y la Alianza, en este periodo prevalecieron las coaliciones sectorizadas en reclamos por temáticas específicas y la movilización promovida por el mismo gobierno. Al igual que en los 90, en muchos casos la política callejera no consiguió sus objetivos. Sin embargo, en todo el periodo kirchnerista preservó su protagonismo y varios movimientos accedieron a canales estatales por primera vez desde el retorno democrático.

Bibliografía

- Bidaseca, Karina y Federico M. Rossi (2008): “Coaliciones nacionales contra procesos continentales de liberalización comercial: la Autoconvocatoria No al ALCA”, en Alejandro Grimson y Sebastián Pereyra (coords.), *Conflictos globales, voces locales: Movilización y activismo en clave transnacional*, Buenos Aires, UNRISD-Prometeo, pp. 51-89.
- Delamata, Gabriela (2009): “¿La ciudadanía poblana? El movimiento asambleario de Gualeguaychú: la construcción y el reclamo de un derecho colectivo”, en Gabriela Delamata (coord.), *Movilizaciones sociales: ¿nuevas ciudadanías? Reclamos, derechos, Estado en Argentina, Bolivia y Brasil*, Buenos Aires, Biblos, pp. 237-276.
- Pereyra, Sebastián (2008): *¿La lucha es una sola? La movilización social entre la democratización y el neoliberalismo*, Buenos Aires, UNGS-Biblioteca Nacional.
- Rossi, Federico M. (2005): “Aparición, auge y declinación de un movimiento social: las asambleas vecinales y populares de Buenos Aires, 2001-2003”, en *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, vol. 78: 67-88.

SEBASTIÁN MAURO Y FEDERICO M. ROSSI

- Schuster, Federico *et al.* (2006): "Transformaciones en la protesta social en Argentina 1989-2003", *Documentos de Trabajo N° 48*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.
- Svampa, Maristella (2008): "Argentina: Una cartografía de las resistencias (2003-2008) Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo", en *Observatorio Social de América Latina*, vol. 24: 17-49.
- Svampa, Maristella y Claudio Pandolfi (2004): "Las vías de la criminalización de la protesta en Argentina", en *Observatorio Social de América Latina*, vol. 14: 285-296.
- Trinchero, Hugo Héctor (2005): *Las empresas recuperadas en Argentina*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras-UBA.